

**Mandatos del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes; del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; y del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**

REFERENCIA:  
UA ESP 5/2020

21 de diciembre de 2020

Excelencia:

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes; Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; y Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con las resoluciones 43/36, 45/24, 43/6 y 43/20 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de su Excelencia la información que hemos recibido sobre alegaciones relativas a actos de violencia por parte de agentes policiales, ocurridos en el barrio de Carabanchel, Madrid, en contra del señor Chidi Irondi, afrodescendiente, migrante, de nacionalidad estadounidense, así como en contra de otra persona afrodescendiente no identificada. Además, la información recibida da cuenta de discriminación racial y violaciones a las garantías mínimas del debido proceso ocurridas al momento y durante la detención preventiva del Sr. Irondi, que podrían estar motivadas simplemente por su ascendencia y color de piel.

Según la información recibida:

El día 26 de junio de 2020, alrededor de las 3:00 pm, el señor Irondi se encontraba en su domicilio cuando escuchó fuertes gritos que procedían de la calle. Al ver por su balcón, observó que cuatro funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía rodeaban a una persona afrodescendiente y la insultaban. En ese momento, el Sr. Irondi comenzó a grabar la actuación policial con su teléfono móvil. Uno de los agentes, al percatarse, le increpó, diciéndole que no podía utilizar las imágenes.

El mismo día, unas horas más tarde, a eso de las 7:15 pm, al salir de su casa, los cuatro agentes que había grabado, se le acercaron y le solicitaron su documentación de identificación. Dado que su pasaporte estaba en casa, lo acompañaron y mientras subían las escaleras, uno de los agentes le golpeó varias veces en la nuca.

Al encontrarse en su domicilio, mientras buscaba su pasaporte, llegaron más agentes, eran entre 8 y 10 policías. En ese momento, sintió miedo y cuando intentó sacar su teléfono móvil para grabar, los policías se abalanzaron sobre él y lo golpearon. Al ver que tenía nacionalidad estadounidense y por ser

afrodescendiente, uno de los agentes puso su rodilla sobre su cuello y comenzaron a hacer bromas sobre la muerte de George Floyd, mientras los demás lo golpeaban. Posteriormente, lo detuvieron y fue trasladado a la Comisaría del Distrito de Carabanchel. Según la información recibida, una vez en la Comisaría, el señor Irondi no tuvo acceso a un intérprete ni fue informado correctamente sus derechos; tampoco fue examinado por un médico y ni se le permitió tomar contacto con su consulado. Además, según las alegaciones recibidas, el Sr. Irondi fue objeto de amenazas y su relato policial fue alterado cuando le incriminaron el delito de consumo de drogas. El Sr. Irondi es asmático y al momento de su detención sufrió asfixia y sintió temor por su vida ante las humillaciones y vejaciones de los agentes de policía.

El Sr. Irondi solicitó su derecho de informar a una persona de su confianza sobre su detención, de realizar una llamada, de informar al consulado y de ver a su abogado. Sin embargo, un agente de policía le indicó que podría realizar una llamada si accedía a borrar las imágenes que había grabado con su teléfono móvil a lo cual se negó. La víctima comprendió sus derechos únicamente al momento que se le remitió el acta de detención, ya que contiene una traducción al inglés.

De acuerdo a la información presentada, el Sr. Irondi fue objeto de malos tratos y humillaciones por parte de la policía debido a su color de piel. Los agentes policiales utilizaron la intimidación y la violencia para convencerle de borrar las imágenes captadas sobre la conducta presuntamente inadecuada de los agentes en contra de otra persona de ascendencia africana.

Además, una vez puesto en libertad, el día 27 de junio de 2020, el Sr. Irondi acudió al Centro Hospitalario Nuestra Señora del Rosario a fin de recibir asistencia médica por los golpes recibidos el día anterior, donde presuntamente no fue tratado de manera adecuada. El 31 de julio de 2020, el Sr. Irondi presentó una denuncia al Juzgado de Instrucción 42 de Madrid por delito contra la integridad moral y delito de lesiones, basados en los hechos antes expuestos en contra de los agentes policiales que participaron en su detención.

Sin pretender juzgar los hechos alegados, quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por las alegaciones relacionadas a los actos de violencia, intimidación, malos tratos y detención arbitraria en contra del Sr. Irondi por parte de los agentes policiales, los cuales se basan, presuntamente en el hecho de ser afrodescendiente y por haber filmado la actuación policial en contra de otra persona afrodescendiente. De ser ciertos, los hechos alegados constituyen una clara violación al principio de igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color, origen nacional o étnico, así como al derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra actos de violencia o atentado contra la integridad personal. Nos preocupa, que este incidente no se trataría de un hecho aislado, puesto que, según lo informado, la actuación policial en contra el Sr. Irondi, parece basarse en el hecho de que él mismo fue testigo de actos de violencia en contra de una persona afrodescendiente. Los hechos alegados podrían constituir además una forma de represalia y abuso de poder por parte de agentes

policiales. Los Estados deben condenar el uso excesivo de la fuerza, las prácticas violentas y racialmente discriminatorias perpetradas por las fuerzas del orden contra personas afrodescendientes, migrantes y todas las demás formas múltiples e interseccionales de discriminación.

Además, nos preocupan las alegaciones que refieren a los malos tratos y uso excesivo de la fuerza de la que fuera objeto el Sr. Irondi al momento de ser interpelado por las autoridades policiales, ya que podrían constituir una grave violación a su derecho de no ser sometido a tortura o malos tratos. De igual forma, es preocupante que las garantías mínimas fundamentales para poder ejercer otros derechos como el acceso a la justicia no hayan sido respetadas. Para el efectivo acceso a la justicia, garantías tales como el derecho a la asistencia jurídica y representación legal, el acceso a la asistencia consular, así como el derecho a ser informado de manera comprensible sobre los motivos de su detención – derecho a la información e intérprete-, son primordiales para garantizar la igualdad de acceso a la justicia sin distinción de raza, color, origen nacional o étnico, o por razón de estatus migratorio.

En relación con las alegaciones arriba mencionadas, sírvase encontrar adjunto el **Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos** el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidos/as de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:

1. Sírvanse proporcionar toda información o comentario complementario respecto de a las alegaciones arriba mencionadas.
2. Sírvanse indicar las medidas administrativas y judiciales adoptadas para llevar a cabo una investigación exhaustiva, pronta e imparcial de los hechos mencionados, así como para enjuiciar y sancionar a los agentes de policía responsables.
3. Sírvase indicar qué medidas han sido adoptadas para prevenir la violencia policial, la incitación a la violencia y la discriminación racial contra personas afrodescendientes, migrantes y todas las demás formas múltiples e interseccionales de discriminación, y cómo éstas son implementadas.
4. Sírvanse brindar información sobre las medidas adoptadas para garantizar que las víctimas de violencia policial de carácter racial tengan acceso a mecanismos de denuncia independientes y eficaces.
5. Sírvanse informar si el perfilamiento racial, y la discriminación racial directa e indirecta están expresamente prohibidas en la legislación relativa la policía y agentes del orden. Indique qué medidas han sido

adoptadas para garantizar que esta prohibición sea respetada por todos los agentes de policía, y cuáles son los mecanismos existentes para asegurar su aplicación.

6. ¿Qué medidas ha adoptado el Estado para recopilar datos desagregados por raza, color de piel, origen nacional o étnico, a fin de detectar y prevenir el perfilamiento racial y la discriminación racial dentro de los cuerpos de policía y de seguridad?
7. Sírvase indicar qué medidas han sido adoptadas a fin de instaurar un diálogo constructivo y significativo entre la policía y las minorías raciales y étnicas, incluidas las personas de ascendencia africana y personas migrantes. ¿Qué iniciativas han sido puestas en práctica para promover una actuación policial orientada hacia las comunidades?
8. Sírvanse indicar qué medidas han sido previstas para definir el alcance y la aplicación de las disposiciones relativas al derecho de filmar las acciones e intervenciones de la policía. Sírvase indicar, además, qué medidas han sido adoptadas para proteger a las personas que filman los abusos y violencia por parte de agentes policiales.

Esta comunicación y toda respuesta recibida por el Gobierno de su Excelencia se harán públicas a través del sitio [web](#) de comunicaciones en un plazo de 60 días. También estarán disponibles posteriormente en el informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos, asimismo, instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

E. Tendayi Achiume

Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia

Dominique Day

Presidente-Relator del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes

Felipe González Morales

Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes

Nils Melzer

Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante

## **Anexo**

### **Referencias al derecho internacional de los derechos humanos**

En lo que respecta las alegaciones mencionadas en la carta de alegación adjunta, quisiéramos referir al Gobierno de su excelencia, a la obligación emanada del artículo 2 párrafo 1 a) de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, adherida por España el 13 de septiembre de 1968, que consiste en “no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación.” Asimismo, el artículo 5 determina la obligación que tienen los Estados de prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, en particular, a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos.

En ese sentido, quisiéramos referirnos a la Recomendación general n°31 sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. En dicha Recomendación general, el Comité determina que los Estados tienen la obligación de prevenir y castigar severamente la violencia, los actos de tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y todas las violaciones de los derechos humanos contra los individuos pertenecientes a los grupos raciales o étnicos, cometidos por agentes del Estado, concretamente por agentes de policía, personal de las fuerzas armadas o funcionarios de aduanas, aeropuertos, instituciones penitenciarias o servicios sociales, médicos y psiquiátricos. Además, los Estados deben velar por el respeto del principio general de proporcionalidad y de estricta necesidad en el empleo de la fuerza contra personas pertenecientes a grupos raciales o étnicos, de conformidad con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. De igual forma, el Comité, en su Recomendación General n°34 sobre Discriminación racial contra afrodescendientes ha determinado que los Estados deben tomar medidas para impedir el uso ilegal de la fuerza, la tortura, los tratos inhumanos o degradantes, o la discriminación contra afrodescendientes por parte de la policía u otros organismos y funcionarios del orden público. En la recientemente adoptada Recomendación general n°36 sobre la prevención y combate al perfilamiento racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha hecho hincapié en la obligación de los Estados de desarrollar e implementar de manera efectiva las leyes y políticas que prohíben la discriminación por perfil racial por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los Estados deben también asegurar una protección efectiva y recursos judiciales contra cualquier acto de discriminación por perfil racial que viole los derechos y libertades fundamentales contenidos en la Convención y garantizar el derecho a solicitar una reparación justa por cualquier daño sufrido como resultado de dicha discriminación.

Asimismo, llamamos a la atención del Gobierno de su excelencia, las obligaciones adquiridas por España, mediante la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 27 de abril de 1977, en particular las establecidas en los artículos 7, 9 y 14. El artículo 7 establece que ninguna persona puede ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 9 reconoce el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personales, a no ser sometido a detención o prisión arbitrarias, y a ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. El artículo 14 determina las garantías mínimas a las que, en condiciones de igualdad, tiene derecho toda persona acusada de un delito, entre las que se encuentra ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; comunicarse con un defensor de su elección; ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal.

Asimismo, el artículo 2 párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estipula la obligación de garantizar que toda persona tenga recursos "accesibles y efectivos" para hacer valer esos derechos (Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 31, párr. 15). Dado que la falta de investigación de las presuntas violaciones de los derechos humanos puede dar lugar en sí misma a una violación separada del Pacto, el Comité de Derechos Humanos estipula que la investigación debe ser llevada a cabo de manera rápida, exhaustiva y eficaz por órganos independientes e imparciales (párr. 15). Asimismo, quisiéramos referirnos al Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes sobre el acceso a la justicia para los migrantes (A/73/178/rev.1). Este último recuerda que en cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, los Estados deben garantizar y facilitar a todos los migrantes cuyos derechos humanos se vean vulnerados el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a instituciones judiciales y cuasi judiciales independientes, competentes, imparciales, eficaces y responsables y el acceso a recurso y reparación.

Asimismo, referimos al Estado a las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por el Estado español, el 21 de octubre de 1987, en particular en lo que respecta la obligación contenida en el artículo 10 de velar por que se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión. Asimismo, a los artículos 12 y 13 de la referida Convención que establecen la obligación de los Estados de garantizar una investigación pronta e imparcial, velando por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competente.

En relación con las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, queremos recordar que de conformidad a Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer

cumplir la ley,<sup>1</sup> los Estados deben garantizar que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, esté estrictamente reglamentado, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, y que cualquier uso indebido o excesivo de la fuerza se sancione de manera apropiada. Los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, tienen el deber de respetar, proteger y velar por el cumplimiento de los derechos humanos de todos de todas las personas, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, recordamos que la rendición de cuentas y los mecanismos de supervisión de la policía forman parte de la gobernanza democrática y son cruciales para desarrollar una cultura de derechos, la integridad y la transparencia en las fuerzas de policía.

Asimismo, quisiéramos llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre las disposiciones enunciadas en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (A/CONF.231/3) que su Excelencia adoptó el 10 de diciembre 2018, el que establece en su objetivo 17 el compromiso de los Estados de eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración. A este respecto el objetivo 17 d) establece el compromiso de los Estados de “establecer mecanismos para prevenir y detectar la utilización de perfiles raciales, étnicos y religiosos de los migrantes por las autoridades públicas, así como los casos sistemáticos de intolerancia, xenofobia, racismo y todas las demás formas múltiples e interseccionales de discriminación, y darles respuesta, en colaboración con las instituciones nacionales de derechos humanos, incluso realizando y publicando análisis de tendencias, y garantizando el acceso a mecanismos eficaces de denuncia y recurso.” El objetivo 17 f) establece asimismo el compromiso de los Estados de “proporcionar a los migrantes, en especial las mujeres, acceso a mecanismos nacionales y regionales de denuncia y recurso para promover la rendición de cuentas y abordar las acciones gubernamentales relacionadas con actos y manifestaciones de discriminación contra los migrantes y sus familias.”

Finalmente, permítanos recordarle, Excelencia, la resolución 9/5 del Consejo de Derechos Humanos, que aborda la cuestión de los derechos humanos de los migrantes y “reafirma [...] la obligación de los Estados de promover y proteger efectivamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, especialmente los de las mujeres y los niños, cualquiera que sea su situación de residencia, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales en que son partes”. La resolución también “reafirma que los Estados, al ejercer su derecho soberano de promulgar y aplicar medidas relativas a la migración y la seguridad de sus fronteras, deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, a fin de que se respeten plenamente los derechos humanos de los migrantes”.

---

<sup>1</sup> [Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, adoptados por el octavo congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana \(Cuba\) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.](#)